

El patrimonio cultural español: derechos y obligaciones ante su conservación

Vicente Poveda Sánchez, arquitecto municipal

Introducción

A modo de breve reseña, se pasa a exponer la legislación española tanto a nivel nacional como autonómica y local que recoge y hace referencia al Patrimonio Nacional en España, con la idea final de tratar de compaginar la realidad física del patrimonio con el Derecho y la obligación de su conservación, por parte de los titulares de los bienes, eliminando de esta manera el peligro de su desaparición.

Legislación nacional (España)

La Constitución Española, sancionada el 27 de diciembre de 1978 y publicada en el B.O.E del 29 de diciembre de 1978, establece por el Capítulo III (De las Comunidades Autónomas), en su Artº 148, pto 1º, subpto 16 lo siguiente:

“Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias sobre el Patrimonio Monumental de interés de la Comunidad Autónoma correspondiente.”

Igualmente el Artº 149, pto 1º, subpto 28; establece:

“El Estado tiene competencia exclusiva sobre:

Defensa del Patrimonio Cultural, Artístico y Monumental Español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas”.

La Ley de Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1.985, de 25 de junio) y el Real Decreto de Desarrollo Parcial de la Ley (R.D 111/1986, de 10 de enero) establecen según la Ley y en su Título Preliminar, Artº 1º:

“Son objeto de la presente ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español.”

Su Artº 7º dice:

“Los Ayuntamientos cooperaran con los Organismos competentes para la ejecución de esta ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción”.

Según el Artº 39.1:

“Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica la conservación, consolidación y mejora de los Bienes declarados de interés cultural.”

Y por último el Artº 39.2 establece que:

“En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior irán encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y puedan probarse su autenticidad.”

El Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio sobre el Texto Refundido de la ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, por el Título I, Capítulo III; Régimen del Suelo Urbano y Urbanizable. Sección 1ª Derechos y deberes básicos de los propietarios, en su Artº 21 (Deberes Legales de Uso, Conservación y Rehabilitación), dice entre otros y por su pto 1º:

“Quedan sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre protección el medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana.”

Por el Título VII, Capítulo I, Intervención en la edificación y uso del suelo, Sección 2ª Deber de Conservación, Órdenes de Ejecución de Obra y Ruina, Artº 245 (Deber de Conservación); pto 1º:

“Los propietarios... de edificaciones deberán mantenerlos en las condiciones y con sujeción a las normas señaladas en el Artº 21.1.”

Y pto 2º:

“Los Ayuntamientos y en su caso los demás organismos competentes, ordenarán de oficio a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones, con indicación del plazo de realización.”

El Artº 246 (Órdenes de Ejecución por motivos Turísticos o Culturales) establece lo siguiente:

1º: Los Ayuntamientos y los Organismos competentes podrán también ordenar, por motivos de interés turístico o estético, la ejecución de obras de conservación y de reforma de fachadas o espacios visibles desde la vía pública, sin que estén previamente incluidas en plan alguno de ordenación.

2º: Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si se contuvieren en el límite del deber de conservación que les corresponde, y con cargo a fondos de la Entidad que lo ordene cuando lo rebasare para obtener mejoras de interés general.

3º: Los propietarios de Bienes incluidos en los Catálogos a que se refiere el Artº 93 de esta Ley podrán recabar, para conservarlos, la cooperación de las Administraciones competentes, que habrán de prestarla en condiciones adecuadas cuando tales obras excedieran de los límites del deber de conservación.”

Legislación autonómica (Madrid)

La Ley 9/1.995, de 28 de marzo de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, establece en su Título VII, Gestión Urbanística, Capítulo 5 (Programas de Rehabilitación Concertada en Áreas Urbanas), por su Artº 97 se dirige a:

“A: Conjuntos o Zonas de Interés Histórico, con grandes deficiencias urbanas y ambientales, significativo deterioro o decadencia funcional de la edificación o las infraestructuras, dotaciones o espacios libres que las sirvan.

B: Áreas Urbanas que con entera independencia de los valores arquitectónicos o urbanísticos que en ellas concurren, presenten deficiencias y carencias sociales de especial gravedad.

Todo ello llevará aparejado, cuando el planeamiento urbanístico vigente no contenga las previsiones necesarias, un Programa de Rehabilitación Concertada, exigiendo el Plan Especial Municipal correspondiente y en todo caso requerirán un Estudio de Rehabilitación Integrada (Áreas de Rehabilitación Integral o A.R.I).”

La Disposición Adicional Tercera establece que:

“Los propietarios de bienes inmuebles que el planeamiento urbanístico sujete a un Régimen de Protección exigente de su preservación, tendrán, además del deber de conservación, el de rehabilitación.”

Este último deber rige incluso cuando en dichos bienes inmuebles llegaran a concurrir las causas legales, que, con carácter general, autoricen la declaración de ruina, excluyendo ésta y, consecuentemente, la demolición y sustitución del inmueble existente y comprende en su contenido la realización de cuantas obras sean precisas para el pleno restablecimiento de las condiciones indispensables para la dedicación del bien al uso al que esté destinado, con entera independencia de su coste.

La Ley 7/1986, de 23 de julio del Patrimonio de la Comunidad de Madrid, establece por su Artº 5.1 que:

“El Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad de Madrid se llevará por la Consejería de Economía y Hacienda... con excepción de aquellos bienes muebles cuyo valor unitario sea inferior a los actuales: 601,01 euros.”

El Artº 23.1 dice:

“Los ciudadanos deberán colaborar con la Consejería de Economía y Hacienda en la investigación, defensa y protección de los bienes y derechos de la Comunidad.”

La Ley 1/1985 de 23 de enero del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares establece por su Artº 15.2.C (Zona de Reserva Natural Integral) que:

“Las obras a realizar, en su caso, se acomodaran a los volúmenes, condiciones constructivas y materiales propios de la Edificación Tradicional en la Zona.”

En dicha Ley, en vigor desde hace más de veinte años, ya se hablaba de Arquitectura Vernácula; siempre que se entienda como tal a aquella que emana del pueblo común, por costumbre y es nativa del país donde se encuentra.

El Artº 17.3 (Parque Comarcal Agropecuario establece que:

“Las edificaciones y construcciones estarán vinculadas a los usos productivos tradicionales agropecuarios, guardando una estricta armonía con el entorno, tanto en su construcción y materiales empleados como por su volumen y emplazamiento.”

La Ley 9/1986 de 20 de noviembre sobre Creación del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña establece en su Artº 26, pto 2º:

“El Plan Comarcal de la Sierra Norte se desarrollará mediante Programas Sectoriales, estando uno de dichos programas referido a las Actuaciones sobre Vivienda y Patrimonio Edificado.”

La Ley 6/1994 de 28 de junio sobre El Parque Regional, Entorno a los ejes de los cursos de los ríos Manzanares y Jarama, establece por su Artº 1, pto 2.a que:

“Dicho régimen jurídico tiene como objetivos el de proteger la gea, fauna, flora, agua, atmósfera y paisaje, así como los restos arqueológicos y paleontológicos de todo el conjunto de los ecosistemas del ámbito ordenado, así como procurar su restablecimiento en los casos en que se hayan producido degradaciones.”

El Artº 28, pto 3.h (Zona de Reserva Natural, Zonas B) y el Artº 29, pto 2.a (Zonas Degradadas a Regenerar, Zonas C):

“Prohíben la realización de edificaciones o construcciones de todo tipo, ya sean de carácter temporal o permanente, con excepción de las obras de conservación, mejora o control que determine el Plan Rector de Uso y Gestión.”

Legislación local (San Fernando de Henares)

El 29 de junio de 1746 Felipe V ordena mediante Real Decreto la anexión del lugar llamado Torrejón de la Ribera al Patrimonio de la Corona, tomando el 30 de agosto posesión del lugar en nom-

bre del nuevo Rey Fernando VI, D. Pedro Díaz de Mendoza, denominándose desde entonces como Real Sitio de San Fernando.

El Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares, de 1988, publicado en el B.O.C.A.M del 8 de agosto de 1988 y en el B.O.E el 15 de agosto de 1988, incorporó, mediante el Real Decreto 3312/1983 de 9 de noviembre, por el cual se declaraba Conjunto Histórico-Artístico el Casco Urbano de San Fernando de Henares, de Madrid; según la delimitación que establecía el Anexo siguiente:

“1º; La Plaza de España, con sus edificaciones y los Restos de la Fábrica de Paños comprendidos por la manzana que la conforma.

2º; El Trazado Urbano, formado por el eje entre las dos plazas (Cuadrada y Redonda) y las Calles radiales (6) que parten de ella.”

Dicho Plan General incluyó El Catálogo de Edificios de Interés Histórico-Artístico y Ambiental, en número de (66), incluyéndose desde el Castillo de Aldovea, pasando por el Conjunto Agropecuario del Soto de Aldovea, el de La Baezuela (con su palomar), las Casas de Daracalde y las Casas de Quintana, hasta la Plaza de Tientas de Vaciabotas, en Suelo No Urbanizable y para el Suelo Urbano en el casco antiguo, Ordenanzas ZU.1 a ZU.4: La Fachada de la Real Fábrica de Paños, la Casa Consistorial y distintas edificaciones tanto residenciales como de servicios, con unas características constructivas tradicionales más que populares, configurándose la inclusión de distintas categorías en base a las Ordenanzas Generales y Normas de Tramitación, siendo estas:

1. Edificios de 1er Orden (Protección Integral), con prohibición de su demolición.
2. Edificios de 2º Orden (Protección Estructural).
3. Edificios de 3er Orden (Conservación Ambiental), con dos Grados; 1º y 2º.

Las Condiciones Generales de Estética del Plan General establecían, para el Casco Antiguo, el Tipo de Intervención permitido tanto en edificios como en solares y las posibles composiciones de volumen, fachadas o cubiertas y los materiales; incluso carpinterías, cerrajerías y canalones, que se pudiesen realizar.

Del mismo modo se trató de las Composiciones del tratamiento de los Espacios Libres Ajardinados de las Plazas.

La Ley 16/1.985 de Patrimonio Histórico Español, por su Artº 20, establece que:

“La Declaración de Conjunto Histórico determinará, la obligación para el municipio el de redactar un Plan Especial de Protección u otro instrumento de planeamiento, que cumpla las exigencias de esta Ley.”

Subvenciones públicas

El Real Decreto Legislativo 1/1.992 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana establecía por su Título VII, Capítulo I, Intervención en la Edificación y uso del suelo, por su Sección 2ª (Deber de Conservación, Órdenes de Ejecución de Obras y Ruina), a través de su Artº 246; (Órdenes de Ejecución por motivos Turísticos o Culturales), pto 2º dice:

“Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si se contuviesen en el límite del deber de conservación que les corresponde, y con cargo a fondos de la Entidad que lo ordena cuando rebase, para obtener mejoras de interés general.”

El pto 3º establece:

“Los propietarios de bienes incluidos en los Catálogos a que se refiere el Artº 93 de esta Ley podrán recabar, para conservarlos, la cooperación de las Administraciones competentes, que habrán de prestarla en condiciones adecuadas cuando tales obras excedieran de los límites del deber de conservación.”

El Real Decreto 726/1.993, previo ayudas para Actuaciones de Rehabilitación Integral en Áreas de Rehabilitación Preferente, como asimismo por el Decreto 6/1.994, de 20 de enero de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares mantiene actualmente un Convenio de Cooperación en materia de Rehabilitación a través de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda y la O.C.R.E de Madrid-Periferia, mediante el cual facilita: Subvenciones, aportaciones a fondo perdido y proporciona la gestión de préstamos a interés preferente con las entidades financieras, como asimismo apoyo técnico; tanto en la redacción de Proyectos Arquitectónicos de Rehabilitación como en la ejecución y Dirección técnica de las obras.

Realidad del Patrimonio Conservado

Desde la mítica aparición de la Carta de Atenas en 1934, pasando por la Carta de Venecia de 1964, hasta nuestros días, se ha legislado y promulgado gran cantidad de leyes, intentando el preservar, mediante la conservación, protección y rehabilitación, nuestro patrimonio histórico y cultural.

Ahora bien; la realidad física del Patrimonio es que éste se concentra en manos de distintas administraciones publicas, la Iglesia y sus órdenes religiosas y en particulares, en distintos grados de conservación, siendo estos últimos los que acumulan el porcentaje mayor de bienes y los más deteriorados por ende.

La gran mayoría de los bienes culturales declarados que se encuentran en municipios medianos, de entre 25.000 hb y 50.000 hb, son de titularidad privada, encontrándose principalmente los bienes inmuebles en precario estado de conservación.

El problema más importante se da en los conjuntos histórico-artísticos de los cascos antiguos de las viejas ciudades, pues los inmuebles se encuentran habitualmente en malas condiciones de habitabilidad, tanto higiénicas como estructurales, ya que sus propietarios o tienen una edad avanzada con pocos ingresos o dichos edificios están en desuso o alquilados con rentas antiguas y bajas, no siéndoles económicamente rentable ni su conservación ni su rehabilitación, dejando caer uno tras otro los edificios de los cascos antiguos de las ciudades españolas, y esto ante la impasibilidad e imposibilidad de los organismos públicos por atajar tal desmedida destrucción del único legado inmobiliario histórico-cultural que nos queda.

Por eso urgen medidas coordinadas entre las tres administraciones nacionales, coherentes y consecuentes con las políticas de conservación del patrimonio cultural español, que motiven a los ciudadanos y propietarios particulares para acometer las adecuadas obras para conservar, rehabilitar y poner en valor económico y cultural nuestros bienes culturales.